

N/REF: 0092/2022

El proyecto remitido tiene por objeto incluir los formatos de los títulos de Especialista y de Máster de Formación profesional, así como los certificados acreditativos de superación de los cursos de especialización de formación profesional de grado medio y de grado superior, correspondientes a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Asimismo, procede a la modificación del apartado 3 del artículo 4, referido a la constitución y funcionamiento de los correspondientes registros, para adaptar las referencias a la vigente normativa sobre protección de datos personales.

Las cuestiones referidas al tratamiento de datos personales en los citados registros fue objeto de especial atención en el Informe 306/2009 de esta Agencia, referido al proyecto de real decreto que ahora se modifica, y en el que se indicaba lo siguiente:

*Desde el punto de vista de la aplicación de las normas de protección de datos resulta relevante el régimen de registros establecido en los artículos 4 y 5 del Proyecto, referidos respectivamente a los registros de las distintas Administraciones educativas y al Registro central de títulos.*

*Conforme al primero de los preceptos citados, “los títulos quedarán inscritos en el Registro Público de titulados que a estos efectos existe en cada una de las Administraciones educativas competentes”, atribuyéndose a cada uno de ellos un código que se imprimirá en el mismo como medida de autenticidad y que formará parte de la clave registral identificativa del título.*

*Además, con anterioridad a la impresión de los títulos, se remitirá la información al Registro Central de Títulos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, que asignará al título su número correspondiente, que se imprimirá en aquél, formando parte de la clave identificativa del título.*

*En todo caso, los artículos 4.3 y 5.2 prevé el sometimiento en la constitución y funcionamiento de los registros y en el acceso a los datos*

*que en los mismos se contengan a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y en el artículo 37 de la Ley 30/1992.*

*En relación con estos preceptos, y al margen de la necesidad de modificar la denominación del Departamento al que se encuentra adscrito el Registro central de títulos, la inclusión en los registros previstos en el artículo 4 de los datos referentes a los alumnos que hubieran obtenido los títulos constituye un tratamiento de datos de carácter personal, que deberá contar con la debida legitimación al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.*

*Del mismo modo, será preciso que la comunicación de los datos al Ministerio de Educación a los efectos de proceder a su inscripción en el Registro Central se encuentre amparada por la mencionada Ley Orgánica.*

*En cuanto a la primera de las cuestiones, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. No obstante, conforme al artículo 6.2 “no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias (o) cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación comercial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”*

*De lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Proyecto se desprende que la inscripción del correspondiente título en los registros de las Administraciones competentes y en el Registro Central tiene una doble finalidad: por una parte, garantizar la autenticidad del título, para lo que se asignará un código por la Administración competente, que se completará con el número asignado por el Registro Central. De este modo, será posible cotejar la autenticidad del título presentado a partir de la información contenida en ambos registros en cuanto sea necesario para proceder a la verificación de la autenticidad del Título otorgado.*

*Al propio tiempo, la constancia registral del título permitirá su reexpedición conforme al procedimiento previsto en el artículo 7 del Proyecto, dado que su apartado 3 dispone que “en el duplicado que se expida deberán figurar impresas las mismas claves registrales que en el original respectivo.*

*En consecuencia, y al margen de tratarse de registros creados, en su ámbito de competencia, por las autoridades educativas correspondientes en su condición de Administración Pública, la*

*existencia del Registro tiene por finalidad la posibilidad de lograr la acreditación de la autenticidad del título obtenido y la posibilidad de proceder a su reexpedición, en su caso. Por tanto, la existencia del Registro puede fundamentarse en la relación surgida entre el alumno que cumpla los requisitos legalmente exigidos para la expedición del título y la administración pública expedidora, garantizándose mediante el tratamiento de los datos la autenticidad y características del documento expedido.*

*A la vista de todo ello, el tratamiento de los datos por los registros de las autoridades educativas se encontraría amparado por el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999.*

*En cuanto a la transmisión de la información al Registro Central, debe en primer lugar señalarse que el tratamiento por parte del Ministerio de Educación podría encontrar acomodo en los mismos argumentos que acaban de sostenerse para los registros de las autoridades educativas.*

*Al propio tiempo, la comunicación de los datos a dicho Registro encontraría su amparo en lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, interpretado a sensu contrario, dado que dicho precepto dispone, en la redacción resultante de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/200, de 30 de noviembre, que “los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”.*

*De este modo, el precepto legitima la comunicación de datos entre Administraciones Públicas para el desempeño de unas mismas competencias, tal y como indica el artículo 10.4 c) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, a cuyo tenor el licita la cesión entre dichas administraciones cuando “la comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen sobre las mismas materias”.*

*Al propio tiempo, como ya se indicó, el Proyecto prevé el sometimiento de los registros a la Ley Orgánica 15/1999.*

*A la vista de todo ello, procede informar favorablemente el Proyecto sometido al parecer de esta Agencia.*

En el momento actual, la normativa sobre protección de datos personales se encuentra comprendida, con carácter general, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), que es de aplicación directa, complementado en aquellos aspectos que el mismo permite por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Conforme al artículo 6.1 del RGPD, la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales en los registros, atendiendo a la doble finalidad perseguida por los mismos, tal y como se indicaba en el anterior informe, será la contemplada en su letra e), “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”, cumpliéndose asimismo con la previa atribución legal de la competencia prevista en el artículo 8.2. de la LOPDGDD: “El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”.

Asimismo, el tratamiento de los datos personales deberá respetar el resto de los principios relativos al tratamiento que se enumeran en el artículo 5 del RGPD, en la forma y condiciones que el citado Reglamento establece.

Por tanto, la modificación proyectada del artículo 4.3 debe comenzar haciendo referencia al RGPD, proponiéndose la siguiente redacción:

«3. Respecto a la constitución y funcionamiento de estos registros y en particular en el acceso a sus datos, se observarán las previsiones que establecen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y las contenidas en el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que existen normas legales específicas que regulan determinados supuestos de acceso a dichos registros, como la disposición adicional segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible:

*Disposición adicional segunda. Acceso a la información del Registro Nacional de Títulos Universitarios, Registro Nacional de Títulos académicos y profesionales no universitarios y Registros Nacionales y Autonómicos de Certificados de Profesionalidad.*

*1. Las Administraciones Públicas, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, podrán acceder a la información contenida en el Registro Nacional Titulados Universitarios Oficiales y el Registro Nacional de Títulos académicos y profesionales no universitarios, gestionados por el Ministerio de Educación, así como en el Registro General de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables y en el Registro estatal de unidades de competencia acreditadas, gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, y en los registros autonómicos equivalentes, cuando tramiten procedimientos en los que resulte necesario acreditar la titulación oficial o la cualificación profesional del solicitante y únicamente deberán utilizar la información con este fin, todo ello con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. De forma específica, quedan autorizados para acceder a esta información:*

*a) Los Colegios profesionales para la tramitación de expedientes de colegiación de sus profesionales.*

*b) Las Administraciones Públicas para la tramitación de los procesos selectivos de personal funcionario o laboral, así como en la aplicación del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizaje no formales y la oferta de la formación complementaria necesaria para obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad.*

*2. El acceso a esta información se realizará preferentemente a través de procedimientos telemáticos, mediante la transmisión de los datos necesarios a los órganos competentes para la tramitación del procedimiento. La transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano o entidad tramitadora en la que se identificarán los datos requeridos y sus titulares, así como la finalidad para la que se requieren. En la solicitud se hará constar que se dispone del consentimiento expreso de los titulares afectados, salvo que dicho consentimiento no sea necesario.*

*De la petición y recepción de los datos se dejará constancia en el expediente por el órgano u organismo receptor. A efectos de la verificación del origen y la autenticidad de los datos por los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanismos para que los órganos mencionados puedan acceder a los datos transmitidos.*

A este respecto, se recuerda que el criterio que viene sosteniendo esta Agencia para la adecuada aplicación del RGPD y la doctrina jurisprudencial respecto de las normas legales que legitiman el tratamiento de datos personales, como pueda ser en el caso de los registros públicos, se basa en la previa realización de un análisis de riesgos y, en su caso, una evaluación de impacto en la protección de datos que permita identificar las garantías adicionales para la protección de los derechos y libertades de los afectados, de modo que puedan incluirse en dichos preceptos legales disposiciones específicas y garantías adicionales que faciliten el pleno cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales.